

CAPÍTULO CUARTO

EL MEDITERRÁNEO

EL MEDITERRÁNEO

POR CARLOS ECHEVERRÍA JESÚS

INTRODUCCIÓN

El año 2003 ha sido especialmente intenso en la región mediterránea, entendiéndose tal intensidad en clave de procesos y de consecuencias de tales procesos tanto a escala nacional como subregional y regional. La ampliación de la Unión Europea —que será efectiva a partir del 1 de mayo de 2004 con la consiguiente adhesión de Chipre y Malta—, los esfuerzos tendentes a aplicar los contenidos de la “Hoja de Ruta” diseñada por el llamado “Cuarteto de Madrid” (EEUU, Federación Rusa, ONU y UE) en la primavera de 2002, o el conflicto y postconflicto en Irak, han tenido y seguirán todos ellos teniendo seguramente en el próximo año una lectura mediterránea y unas consecuencias para la seguridad en el Mediterráneo. Por otro lado, acontecimientos internos producidos en países como Argelia, Marruecos, Libia o Turquía, entre otros, han tenido y seguirán teniendo consecuencias en contextos tanto subregionales como regionales.

Una aproximación geográfica nos permitirá observar cómo en la orilla norte se sigue avanzando en la vertebración de iniciativas tendentes a dar respuesta a los desafíos que cada vez con más crudeza se manifiestan en el Mediterráneo —desde los tráfico ilícitos de todo tipo al terrorismo—, y que van desde aproximaciones sectoriales en el ámbito de la seguridad entendida en sentido clásico hasta el reforzamiento de mecanismos de cooperación en el contexto de un Proceso de Barcelona llamado a ser continuamente perfeccionado. En la orilla sur, y junto a los múltiples avances y retrocesos en el llamado Proceso de Paz para Oriente Medio (PPOM), destaca la evolución de los países de la Unión del Magreb Árabe (UMA), que habrá que estudiar

más en clave nacional que subregional del Mediterráneo Occidental aunque sin dejar de lado dicho contexto, máxime si tenemos en cuenta la vigencia del llamado Grupo 5+5, que reúne a dichos Estados con sus cinco vecinos del llamado “arco latino del Mediterráneo Occidental” (Portugal, España, Francia, Italia y Malta) y cuyo dinamismo ha sido especialmente intenso a lo largo de 2003. De igual manera es preciso destacar que el llamado Proceso de Agadir —que reúne a Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez en el objetivo común de crear una zona de libre cambio en 2005 abierta a otros países árabes— sigue siendo referencia obligada y motivo de interés para Estados y Organizaciones Internacionales.

Cuando a partir de mayo de 2004 la Unión pase a ser un actor internacional formado por 25 Estados, el Mediterráneo político-diplomático, representado como nunca antes por el importante marco de diálogo y de cooperación conocido como Proceso de Barcelona, tendrá una fisonomía distinta a la actual, hecho éste que es importante destacar en toda su importancia. No sólo Malta y Chipre serán ya miembros de pleno derecho de la UE —con una pertenencia de Chipre que no sabemos aún hoy que características tendrá, dependiendo ésta de la culminación o no de las negociaciones entre las dos comunidades que conforman la isla— sino que Turquía podrá también haber avanzado en el establecimiento de una fecha de inicio de sus negociaciones de adhesión a la Unión. Por de pronto, Malta se aseguró una plácida aproximación a la adhesión gracias a la victoria electoral del “sí” en el referéndum celebrado el 9 de marzo: con un índice de participación de más del 90% del electorado, el “sí” a la adhesión obtuvo un 53% de los votos. En resumen, con la adhesión a la UE de los dos Estados insulares y con el comienzo de las negociaciones de adhesión por parte de Turquía, el Proceso de Barcelona pasará a ser, en gran medida, un marco de concertación y de cooperación de Europa con una selección de países árabes —con el posible cambio de status de observador a miembro de pleno derecho de Libia— y el Estado de Israel.

ORIENTE PRÓXIMO Y LA DIFÍCIL APLICACIÓN DE LA HOJA DE RUTA

El PPOM ha seguido mostrándose extremadamente frágil y 2003 comenzaba con un balance negativo de otros instrumentos diseñados para aproximarse a la paz en la región —el Informe Mitchell, el Plan Tenet, el borrador Zini, etc.— y con ciertas esperanzas centradas tanto en torno a la Hoja de Ruta propuesta por el Cuarteto de Madrid, y cuyo tercer y definitivo borrador había sido aprobado a fines de diciembre, como ya más concretamente en torno a la

visión de paz de dos Estados conviviendo en buena vecindad, expuesta por el presidente George W. Bush el 24 de junio de 2002, y ello pese a que el fenómeno terrorista y la crisis de Irak dificultaran enormemente su puesta en práctica. Con el telón de fondo de múltiples ataques terroristas contra ciudades israelíes —como el doble atentado producido en Tel Aviv el 5 de enero, que provocó 23 muertos y más de 100 heridos—, reanudados tras casi dos meses de relativa calma, seguidos de medidas casi automáticas de represalia, los palestinos avanzaban en la reforma de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) con el nombramiento de Mahmud Abbas (Abu Mazen) como primer ministro, que no se confirma hasta mediados de marzo. Abbas, número dos de la jerarquía de Al Fatah y uno de sus fundadores, estuvo involucrado en el proceso negociador que llevó a los acuerdos israelo-palestinos de Oslo, en 1993, y se había reunido en diversas ocasiones con el propio primer ministro israelí, Ariel Sharon, que ahora acababa de formar no sin dificultades un gobierno sin laboristas tras las elecciones de 28 de enero. La nueva misión de Abbas estaba llamada a ser mucho más delicada que las anteriores dado que las resistencias del presidente Yasser Arafat, que había comenzado el año confinado en la sede presidencial de La Mukata, en Ramala, a ceder competencias —tanto el reparto de poder en general como el control de las fuerzas de seguridad en particular— y la animadversión hacia su figura de los grupos radicales Hamas y Yihad Islámica representaban un importante obstáculo en el comienzo mismo de su actividad como primer ministro. A los pocos meses, la imposibilidad de convencer a Arafat de la necesidad de ceder espacios y la incapacidad de desmantelar las infraestructuras terroristas palestinas —ante la falta, todo hay que decirlo, de una fuerte presión internacional para permitir vislumbrar cualquiera de ambas cosas— llevarían a Abbas a renunciar a su cargo.

En febrero, el primer ministro Sharon se entrevistaba con Ahmed Qurei y otros líderes palestinos hacían lo propio con el jefe de gabinete de Sharon, Dov Weisglass, y con el director del Consejo Nacional de Seguridad israelí, Efraim Halevy. Dicho movimiento se interpretó tanto en clave de política interna israelí —necesidad de contar con los laboristas para tener estabilidad de gobierno— como internacional, en el contexto de la crisis iraquí para desactivar Oriente Próximo y, de paso, aprovechar los contenidos beneficiosos para Israel presentes en la Hoja de Ruta. La presión estadounidense en esos meses debía entenderse no sólo como contribución necesaria al proceso de paz sino también como intento de evitar que un agravamiento en Oriente Próximo introdujera más problemas en el frente iraquí. La UE por su parte intentaba también coadyuvar al cumplimiento de las tres grandes fases incluidas en la Hoja de Ruta, máxime cuando la primera de ellas preveía que, a mediados de 2003, la parte palestina hubiera llevado ya

a cabo reformas en su aparato de seguridad e Israel hubiera replegado sus tropas a las posiciones anteriores al estallido de la segunda Intifada, en septiembre de 2000. Tras ello estaba previsto el establecimiento de un Estado palestino con fronteras provisionales y el comienzo, en 2004, de negociaciones para un acuerdo final.

En mayo, una ola de terror sacudía Israel con el estallido de cinco bombas humanas en menos de 48 horas, así como múltiples ataques contra colonos utilizando desde disparos de armas ligeras contra vehículos hasta el de cohetes artesanales “Kassam” sobre asentamientos y localidades fronterizas. Mientras Israel exigía a un ya prácticamente exhausto Abbas tras un mes como primer ministro resultados, difíciles de vislumbrar en un escenario en que los principales grupos terroristas palestinos actuaban cada vez más de forma simultánea y en el que cada vez más jóvenes se alistaban en sus filas como reflejo de la impotencia colectiva.

A principios de junio se celebraba en la localidad jordana de Aqaba una reunión de alto nivel entre Bush, Abbas y Sharon, tras la aprobación por el gobierno de este último, el 25 de mayo, de la Hoja de Ruta (12 votos contra 7 y 4 abstenciones). En esta reunión se reforzaba ante todo la necesidad de actuar en función del enfoque israelí, que considera que de los cuatro miembros del Cuarteto el único que puede ocuparse de cuestiones de seguridad es EEUU, actor fundamental también a la hora de tratar el otro gran capítulo delicado de la Hoja de Ruta: la discusión sobre los asentamientos judíos en territorio palestino. Sharon se comprometió en Aqaba a dismantelar enclaves ilegales y otras medidas tendentes a reducir la tensión. Por su parte, la UE intentaba, tanto a través de una presidencia griega a punto de llegar a su terminación a fines de junio para dar paso a la presidencia italiana, como también a través del alto representante y secretario general del Consejo, Javier Solana. y, desde el 14 de julio, también a través del nuevo representante especial, el embajador Marc Otte que sustituía al veterano Miguel Angel Moratinos, jugar un papel complementario con especial relevancia en el mantenimiento de contactos fluidos con los países árabes y con la propia ANP. Pero no hay que olvidar que junto a las desavenencias entre Israel y la Unión como tal, durante la presidencia italiana de la UE los contactos entre ésta y la parte palestina se han visto afectados por la amistad del primer ministro Silvio Berlusconi con su homólogo Sharon, habiéndose negado a entrevistarse con Arafat durante una visita a la zona en julio.

Al verano se llegaba con una tregua de los grupos terroristas palestinos, la denominada Hudna (término traducido vulgarmente como tregua), y en julio Sharon lograba convencer a

regañadientes a parte de su gobierno tanto para liberar a un pequeño grupo de entre los miles de prisioneros palestinos encarcelados en Israel como para ofrecer a EEUU un repliegue simbólico de las tropas israelíes de Gaza y de la ciudad de Belén, medidas todas ellas ampliamente criticadas por al extrema derecha israelí. Tras casi tres años de la segunda Intifada o “Intifada Al Aqsa” el balance era en esas fechas estremecedor: 2.200 palestinos y 900 israelíes muertos y múltiples heridos en ambas partes. Por otro lado, en paralelo, la dimisión a principios de julio de Abbas como miembro de Al Fatah, con cuya vieja guardia estaba cada vez más enfrentado por lo que ésta calificaba de entreguismo a Israel, y su amenaza de dimitir también como primer ministro mostraban las luchas internas en el lado palestino. El comienzo de la tregua se había simultaneado con la puesta en marcha del primer acuerdo importante entre Israel y la ANP desde el comienzo de la Intifada —la transferencia de la responsabilidad de la seguridad de Gaza y la ciudad de Belén a las fuerzas palestinas— y consistiría, en principio, en una interrupción de las acciones armadas por parte de Hamas y Yihad Islámica de tres meses y de seis meses por parte de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa encuadrados en Al Fatah, la organización dirigida por Arafat.

En julio, el balance de la tregua no era muy esperanzador: desde la perspectiva palestina, la liberación de prisioneros palestinos o la eliminación tanto de puestos de control como del cerco de ciudades palestinas y de la propia Mukata no se producían al ritmo deseado, mientras que Israel no detectaba que se dismantelaran las infraestructuras terroristas sino, más bien, todo lo contrario, tal y como lo atestiguaban en julio las declaraciones del líder de Hamas, Abdel Aziz Rantisi, quien renovaba el objetivo último de su organización de destruir el Estado judío. Según los servicios de seguridad israelíes, la tregua estaba siendo aprovechada, por ejemplo, por Hamas para fabricar más cohetes “Kassam” con los que poder amenazar y atacar asentamientos judíos, destacando que tanto Hamas como Yihad Islámica seguían hablando del “enemigo sionista” y planteaban exigencias imposibles a Israel —evacuación “sionista” de las tierras palestinas, que según su ideario incluiría todo el territorio del Estado de Israel—, en comparación con la rama armada de Al Fatah que planteaba reivindicaciones enmarcadas en un contexto de coexistencia palestino-israelí. El enfrentamiento, también en julio, entre Arafat y Abbas, al exigir el primero reducir las competencias otorgadas por el segundo al coronel Mohamed Dahlan como ministro de Interior, para recuperarlas en el marco del Consejo de Seguridad por él creado, era un buen indicador. El atentado de Hamas que el 19 de agosto provocó en Jerusalén 21 muertos —de ellos siete niños de entre tres meses y 14 años y una mujer embarazada— y más de 100 heridos, entre ellos 40 niños, puso fin a la tregua proclamada por las organizaciones terroristas palestinas,

reabriéndose el ciclo de violencia y poniendo al gobierno de Abbas, que cumplía en esas fechas sus primeros tres meses al frente del gobierno, en una situación extrema.

Los atentados, suicidas o no, producidos en agosto y septiembre, llevaron al Israel a vislumbrar incluso la reocupación de Gaza, baluarte de las organizaciones terroristas, a acelerar la construcción del muro o valla de separación entre Israel y el territorio cisjordano, a una política de continuidad en la construcción de asentamientos, y a propiciar cambios en la clase política palestina. En cuanto a este último punto, es importante destacar que los actores del Cuarteto han centrado en él su atención y sus esfuerzos a lo largo de 2003.

La declaración del Cuarteto de 25 de septiembre, en la que urge a la ANP a frenar la violencia y a Israel a suspender la expansión de los asentamientos en los territorios ocupados, marcó el comienzo de un nuevo intento de reconducir el proceso diplomático. En dicha declaración se hacía especial hincapié en la necesidad de que la parte palestina desbloqueara las negociaciones, y antes de consensuarla el secretario general de la ONU, Kofi Annan, planteó la necesidad de desplegar fuerzas internacionales sobre el terreno, idea rechazada frontalmente tanto por Israel como por EEUU. La respuesta palestina a las exigencias del Cuarteto se gestó en el seno de Al Fatah, donde se decidió sustituir a Abbas por un candidato al que Arafat, finalmente, encargó la formación de un gobierno de emergencia: Ahmed Qurei (Abu Ala), hombre con escaso carisma pero con un buen historial ya que dirigió la delegación palestina que negoció en 1993 los Acuerdos de Oslo y que, además, se había entrevistado en febrero con el propio Sharon. Así, el hasta entonces presidente del Consejo Legislativo palestino formó un gobierno de emergencia de ocho miembros, pero semanas después, el 9 de octubre, anunciaba su voluntad de dimitir ante sus discrepancias con Arafat en cuanto a la composición y responsabilidades de dicho gobierno. A título de ejemplo ilustrativo es importante destacar que, a los pocos días de la dimisión de Abbas, todos los organismos de seguridad habían sido transferidos a la autoridad del Consejo Nacional de Seguridad controlado por los próximos a Arafat. A pesar de estas dificultades, y de que Arafat no había renunciado a ninguna de sus competencias sobre las fuerzas de seguridad como le exigían EEUU e Israel, el gobierno de Qurei echa a andar desde octubre, animado tanto por EEUU como por el propio Arafat y por tres semanas seguidas en septiembre sin atentados. Uno de los obstáculos añadidos que ha encontrado en su corta vida ha sido el atentado que el 15 de octubre destruía un vehículo diplomático matando a tres agentes de seguridad estadounidenses y la dura respuesta de Sharon a un sangriento atentado suicida producido en Haifa el 3 de octubre, en vísperas del Yom Kippur,

y en la que simultaneó operaciones en territorio palestino con el ataque contra el campo de entrenamiento palestino de Ein Saheb, a tan sólo 8 kilómetros de Damasco, considerado por la inteligencia israelí como controlado por el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) de Ahmed Jibril que actuaría en conexión con el Ejército sirio. Por otro lado, EEUU bloqueó una resolución de condena del Consejo de Seguridad sobre este ataque.

A mediados de noviembre, y antes de entrar en funciones, el gobierno palestino de Qurei ya había sido criticado tanto por EEUU como por Israel. Tras una pugna similar a la que tuvo con el efímero primer ministro Abbas, y con su ministro de Interior, Dahlan, Arafat imponía a Qurei sus condiciones: los servicios de seguridad (más de 56.000 efectivos, según un demoledor informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en octubre), seguirán bajo su control tras la designación de Hakam Balawi como titular de esa cartera, en lugar del general Nasser Yusef, candidato de Qurei y que había declarado que el movimiento de liberación nacional palestino es el único movimiento independentista en la historia moderna que ha fracasado y que el líder de la ANP es el responsable. Junto con Dahlan, Yusef ha venido siendo una de las principales voces autorizadas que han sido críticas con la actitud de Arafat.

En este ambiente enrarecido, a principios de noviembre el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas israelíes, el general Moshe Yaalon, concedía tres entrevistas simultáneas a los tres principales diarios de su país en las que aludía a la falta de esperanza y de expectativa para los palestinos tanto en la franja de Gaza como en Belén o en Jericó, para concluir diciendo que las decisiones tácticas de Israel van en contra de los propios intereses del país. Junto a estas opiniones autorizadas es importante destacar que el debate se anima y se endurece en los últimos meses del año con el input que representa a fines de octubre la reunión de Ginebra de antiguos responsables políticos y militares junto a intelectuales para diseñar no una declaración de principios, sino un plan concreto, detallado, que no deja fuera ningún asunto por sensible que sea y que, además, es sometido a aprobación con gran despliegue mediático, el 1 de diciembre en la misma localidad suiza donde se gestó.

A fines de noviembre el primer ministro Qurei se esfuerza en lograr una nueva tregua, con la ayuda de nuevo del general Omar Suleiman, jefe de los servicios de inteligencia de Egipto, que ya contribuyera a alcanzar la anterior. Éste exige para avanzar en la negociación que las fuerzas de seguridad preventiva palestinas se unifiquen de nuevo —como lo estuvieron bajo Dahlan como ministro de Interior— tras ser divididas en dos unidades por influencia de Arafat.

El telón de fondo de este nuevo intento de avanzar hacia la paz utilizando como herramienta la Hoja de Ruta es el constituido por un Cuarteto que parece perder fuerza —sobre todo ante las débiles energías insufladas por EEUU, el actor que entre los cuatro más capacidad de acción tiene en la región y que ahora se ve desbordado por otras cuestiones como Irak, la guerra contra el terrorismo en otros frentes o la campaña para las presidenciales de noviembre de 2004 ya en marcha— y que ha llevado a personalidades palestinas e israelíes a reunirse en secreto en Ginebra y a aprobar el plan anunciado en noviembre y madurado en una nueva reunión en diciembre que refleja conocimientos, pragmatismo por ambos lados y, sobre todo, una gran desilusión ante la inacción, o incluso la acción en negativo, de los actores oficiales. Arafat, por su parte, desea celebrar elecciones legislativas y presidenciales para junio de 2004, pero no se vislumbran candidatos sólidos para sustituirle y él no parece querer abandonar el cargo. En apoyo a los esfuerzos de las partes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba por unanimidad en noviembre la Resolución 1515 patrocinada por la Federación Rusa, y que apoya la aplicación inmediata de la Hoja de Ruta.

Los otros actores de Oriente Próximo que se asoman al Mediterráneo —Siria, Líbano y, aunque sin costa mediterránea pero sí firme vocación de pertenecer a la cuenca, Jordania— han vivido las vicisitudes tanto del Proceso de Paz como de la crisis, conflicto y postconflicto iraquí, con inquietud. El presidente sirio, Bashar Al Assad, ha debido de mantener una posición cuatelosa ante la caída del régimen de Sadam Hussein, con quien no le unían vínculos estrechos sino todo lo contrario pero cuya caída ha supuesto, desde la perspectiva del nacionalismo árabe que el partido Baaz también gobernante en Damasco propugna un agravio adicional producido por Occidente en connivencia con Israel. En una entrevista aparecida en abril en un periódico libanés, Al Assad apostó por la teoría conspiratoria a la hora de analizar la política estadounidense respecto a Irak y al resto del mundo árabe: su objetivo sería apoderarse del petróleo y diseñar un nuevo mapa de Oriente Próximo que sirva los intereses de Israel. En la misma entrevista llamaba al mundo árabe a aprender de la resistencia de Líbano. Según EEUU, Siria habría ayudado a cuadros del régimen de Sadam a buscar refugio para sí mismos y para parte de su equipo militar y habría permitido el paso de miles de voluntarios árabes que se habrían introducido en Irak para combatir a los occidentales, acusaciones ambas que el régimen de Damasco califica de “propaganda sionista”. En noviembre el Senado estadounidense aprobaba, tras haberlo hecho ya el Congreso en octubre, la aplicación de sanciones de diverso tipo a Siria, quedando ahora en manos del presidente Bush el optar por unas u otras.

Por otra parte, en Jordania han sido más los efectos de la crisis y posterior conflicto y postconflicto en el vecino Irak que el pulso israelo-palestino —o incluso que el mantenido entre Israel, por un lado, y Siria y Líbano por otro— los que se han dejado sentir en la seguridad interna del país. Nada más comenzar la ofensiva bélica, el 20 de marzo, el rey Abdallah II se vió obligado a hacer un llamamiento a la “unidad del pueblo para mantener la seguridad y la estabilidad de Jordania”. Días después Irak acusaba a Jordania de facilitar a EEUU su espacio aéreo e incluso de permitir la presencia militar estadounidense en la frontera jordano-irakí. A principios de abril las autoridades detenían en Ammán a un grupo de agentes iraquíes cuyo objetivo era envenenar los depósitos de agua potable que abastecían a las fuerzas estadounidenses estacionadas en las cercanías de la frontera con Irak. La expulsión de cinco diplomáticos iraquíes estuvo relacionada con dicha operación abortada y otros cuatro iraquíes fueron detenidos como sospechosos de intentar incendiar el Grand Hyatt Amman Hotel, donde se hospedaban militares y periodistas estadounidenses. En el verano, la voladura en un atentado suicida de la Embajada de Jordania en Bagdad ponía de nuevo de manifiesto los riesgos de la vecindad jordano-irakí y las amenazas a las que está sometida su política, por más conciliadora que trate de ser. Irak venía siendo el principal cliente comercial árabe de Jordania y la mitad de los cinco millones de toneladas de petróleo que Irak suministraba anualmente a los jordanos era cedida gratuitamente y el resto a precios por debajo de los internacionales.

Situado en la confluencia de Oriente Próximo con Europa, Turquía ha seguido tratando de consolidar en 2003 tanto su estabilidad interna como su papel regional. El gobierno que dirige el islamista moderado Recep Tayeb Erdogan ha tenido que hacer frente en noviembre a una ofensiva terrorista sin precedentes en el país, con atentados suicidas dirigidos contra la comunidad judía turca, primero, y contra intereses británicos después. En el contexto exterior el régimen turco ha seguido tratando de consolidar su posición en Occidente, que a fines de 2002 tenía su mejor reflejo en los acuerdos “Berlín Plus” que, gracias al desbloqueo turco, han permitido en 2003 el empleo por la UE de medios de la OTAN con su mejor reflejo en la Operación “Amber Fox” de la Unión en Macedonia. Junto a esa realidad positiva hay que añadir para el período tratado los desencuentros sufridos con EEUU en lo referente a la definición de un papel para Turquía en el contexto de la crisis, primero, y del conflicto y postconflicto después en Irak, y ya al final del año, los atentados suicidas producidos en Estambul en noviembre: el día 15 contra dos sinagogas (25 muertos) y el día 20 contra el Consulado General del Reino Unido y contra la sede del banco HSBC (27 muertos).

LA ORILLA SUR DEL MEDITERRÁNEO

En el Norte de África tanto las vicisitudes de los procesos políticos internos como el levantamiento de las sanciones de la ONU a Libia en verano o el incremento del activismo terrorista en frentes tradicionales —Argelia— y en otros más novedosos —Marruecos— han constituido los principales temas a destacar durante 2003. Por otro lado, el rechazo a la guerra de Irak fue manifestado en diversos contextos tanto por las autoridades como por las opiniones públicas de estos países. En el terreno de los procesos políticos, y a añadir a lo que de cada país norteafricano pueda decirse, es destacable la publicación en 2003 del *Informe Sobre Desarrollo Humano en el Mundo Árabe 2003* publicado con el subtítulo de *Construir la sociedad de la Información* (<www.undp.org/rbas/ahdr/ahdr2/presskit/6_AHDRO3ExSum_E.pdf>), que es continuación del Informe más general publicado en 2002 y que tanto debate ha provocado y sigue provocando: ambos demuestran cómo tanto en desarrollo político como en desarrollo económico, social y cultural queda aún mucho trabajo por hacer en la región.

Egipto

El país más importante del mundo árabe (67 millones de habitantes) se debate entre la crisis económica y las incógnitas políticas, incluyendo entre estas últimas la sucesión de Mohamed Hosni Mubarak (74 años), reelegido Presidente en junio de 1999 con el 93,79% de los votos, y cuyo mandato no expira hasta mayo de 2005.

Según el informe de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África de 2003, el país sólo crece un 3% anual, lo justo para compensar el crecimiento demográfico pero insuficiente para estimular la economía. Las perspectivas son negativas pues son más de 8.000 millones de dólares procedentes del turismo, de remesas de inmigrantes y de exportaciones que en 2003 los que no se ingresarán por la guerra de Irak y la inestabilidad en Oriente Próximo. La moneda se ha depreciado un 30% desde principios de año y el índice de pobreza ha pasado del 12% al 17% de la población. A principios de septiembre una súbita escasez de pan en El Cairo estuvo a punto de reproducir la sangrienta revuelta del pan en 1977. Sin embargo, y siempre dentro del terreno económico, Egipto aporta en 2003 algunos datos esperanzadores. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos del país, cayó un 23% en lugar del 50% previsto en un

escenario de guerra larga en Irak, y el ministro del ramo, Mamduh el-Beltagui, ha tratado de incentivar el turismo árabe y, en especial, el libio.

En este contexto, agravado por el estado de emergencia desde el asesinato de Anuar el Sadat el 6 de octubre de 1981, cada vez se habla más de la sucesión de Mubarak, presidente del oficialista Partido Nacional Democrático (PND), uno de los cuatro partidos legales, que controla 410 de los 454 escaños del Parlamento. Su hijo Gamal Mubarak, educado en la Universidad Americana de El Cairo y secretario general del PND desde 2002, parece actuar como candidato. Tras varias visitas a capitales europeas, en junio viajó a EEUU donde se entrevistó con el vicepresidente, Dick Cheney, y con la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, y el 29 de septiembre clausuró la reunión del Consejo Nacional del PND con un grandilocuente discurso sobre democracia y desarrollo. El desvanecimiento de su padre cuando pronunciaba el discurso de apertura del Parlamento el 19 de noviembre hace que las especulaciones sobre la sucesión se hagan más intensas. Por otro lado, el ascenso de Gamal en el PND se ha hecho a costa de otras figuras de peso como el primer ministro, Atef Abid; el ministro de Información, Safwat Cherif; o el presidente del Parlamento, Fathi Surur. Gamal Mubarak parece tener el objetivo de sustituir a su padre en 2005, por encima también de una figura emergente como es el general Omar Suleimán, director de los servicios de inteligencia y pieza clave en la tregua de los grupos terroristas palestinos del pasado verano y que afianza su presencia con el nuevo intento de lograr una tregua que se vive en el mes de noviembre.

Libia y Túnez

El régimen de Muammar el Gaddafi ha consolidado a lo largo de 2003 sus esfuerzos tendentes a lograr una progresiva normalización con EEUU y ello en un contexto internacional complejo como ha sido el de la crisis y posterior guerra de Irak. Aunque llamara en diversas ocasiones a evitar el conflicto, Gaddafi no ha olvidado su tradicional enfrentamiento con Hussein y no ha querido sacrificar su aproximación a Washington para eliminar las sanciones.

El 11 de marzo se ultimaba en Londres un proyecto de acuerdo entre el secretario de Estado adjunto para Oriente Próximo y Norte de África, William J. Burns, y el embajador de Libia, Mohamed el-Zwai, por el que Libia reconocía la participación de algunos de sus ciudadanos en acciones terroristas y creaba un fondo especial de 2.700 millones de dólares para

indemnizar a los familiares de las víctimas. A principios de junio se filtraba la noticia del acuerdo de indemnización con EEUU y Reino Unido, y ello después de que un mes antes el ministro libio de Asuntos Exteriores, Abdelrahman Chalgam, aceptara su responsabilidad civil; con ello se abría la posibilidad no sólo de un levantamiento definitivo de las sanciones de la ONU contra Libia —suspendidas temporalmente desde 1999— sino de una profundización de relaciones con el país magrebí, necesitado en esos momentos —en los que producía un millón y medio de barriles de petróleo diarios— de inversiones y de tecnología para dinamizar un sector energético que corría y corre el riesgo de estancarse.

Tras meses de negociaciones, el acuerdo era finalmente alcanzado el 13 de agosto en Londres, entre representantes libios y abogados de las familias de las víctimas del atentado de Lockerbie (diciembre de 1988), y suponía un importante avance hacia la solución de este largo contencioso aunque habían surgido otros nuevos. En pocos días, el gobierno libio abrió una cuenta de compensación en el Banco de Pagos Internacionales por 2.700 millones de dólares (10 millones por víctima), enviaba una carta al presidente del Consejo de Seguridad reconociendo su responsabilidad e, incluso, se comprometía ante Alemania a indemnizar a las familias de los tres muertos y de los 260 heridos del atentado de 1986 contra una discoteca en Berlín occidental, por el que un tribunal alemán le había considerado culpable en noviembre de 2001. Como resultado inmediato, el Reino Unido presentaba el 18 de agosto en el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución para levantar las sanciones contra Libia, pero dos días después el ministerio francés de Asuntos Exteriores anunciaba que la bloquearía mientras persistiera la falta de equidad entre las indemnizaciones por el vuelo UTA 772 (tres veces inferior por víctima) derribado en septiembre de 1989 —y por el que un tribunal de París condenó en marzo de 1999 en ausencia a seis ciudadanos libios— y el de Lockerbie. El 21 de agosto representantes de las víctimas del avión francés se trasladaban a Trípoli para negociar un acuerdo con la Fundación Gaddafi que permitiera votar el proyecto de resolución y normalizar la situación internacional del país magrebí, lo cual se hizo unos días después.

Por otro lado, a mediados de junio el coronel Gaddafi anunció vagamente su voluntad de privatizar de forma progresiva la banca y el sector energético de su país, así como la apertura de este a la inversión extranjera. A fines de mayo, Repsol YPF había firmado un contrato con la National Oil Company (NOC) que, con una inversión inicial de 76 millones de euros, le permitirá la exploración de seis bloques en el país, consolidando su cartera de proyectos y aumentando la posibilidad de descubrimientos significativos de gas y petróleo en los próximos

años. A fines de noviembre, Repsol YPF firmaba un nuevo contrato de exploración y producción con la NOC junto con la australiana Woodside Energy y la griega Hellenic Petroleum; con este nuevo contrato Repsol YPF puede superar ya el 15% del total de la producción libia que gestionaba hasta ahora. La petrolera española, al igual que el resto de las compañías occidentales, siguen y seguirán atentamente los avances en las prometidas reformas económicas y legislativas libias.

Frente a estas expectativas las relaciones de Libia con los países europeos corren el riesgo de deteriorarse de no reforzarse la cooperación en el ámbito de la inmigración irregular. En un naufragio ocurrido el 20 de junio entre la costa tunecina y la isla italiana de Lampedusa, cerca de 200 inmigrantes irregulares perdieron la vida. Las autoridades tunecinas e italianas aludieron a la complicidad libia en la circulación de pateras. Esta cuestión puede enrarecer unas relaciones bilaterales calificadas de excelentes, como se puso de manifiesto durante el viaje de Gaddafi a Túnez (19-25 mayo) y se reflejan, entre otros ejemplos, en la gestión conjunta de la explotación petrolífera off shore “7 de noviembre”, durante mucho tiempo en disputa entre ambos países. Libia tiene mucho que perder si tenemos en cuenta que las relaciones de Trípoli con los países europeos van adquiriendo una notable velocidad de crucero: junto al protagonismo libio en 2002, albergando en su capital tanto la reunión ministerial del Grupo 5+5 del Mediterráneo Occidental (mayo de 2002) como la Conferencia Ministerial de Ministros de Interior del Mediterráneo Occidental (julio de 2002), en 2003 Libia ha seguido participando como observador en el Proceso de Barcelona (reunión intermedia de ministros de Asuntos Exteriores de Creta, en mayo, y reunión oficial de dichos ministros en Nápoles en diciembre) y ha intensificado sus relaciones bilaterales en especial con España, tal y como quedó consolidado durante la visita de Estado del presidente José María Aznar a Libia en octubre de 2003.

El férreo control del país por parte del régimen del presidente Ben Alí impedía que en Túnez, en los primeros meses de 2003, la población pudiera manifestarse en contra de las presiones internacionales contra Irak. El temor del régimen tunecino al terrorismo islamista viene de atrás y está justificado por ser Túnez uno de los primeros países del Magreb donde se sufrió esta lacra, en años lejanos como son mediados de los ochenta. Después del 11-S el país ha sufrido atentados y a visto a ciudadanos suyos conformando células del terrorismo transnacionalizado de Al Qaeda como lo fueron los dos asesinos del comandante afgano Massud. El 7 de junio era detenido en el aeropuerto parisino de Roissy Christian Ganczarski, un alemán expulsado de Arabia Saudí, ligado tanto al atentado de Yerba de 21 de abril de 2002 como a la

célula de Hamburgo a través del marroquí Munir el Motassadeq, condenado en Alemania a 15 años de cárcel por complicidad en el 11-S.

Las relaciones de España con Túnez se han intensificado tras la visita a Madrid, el 15 de enero, de su primer ministro, Mohamed Ghannouchi, quien presidió junto con el presidente Aznar la V Reunión de Alto Nivel (RAN). En ella se exploraron fórmulas para intensificar las relaciones económicas, en las que existen ya precedentes como el despliegue de nueve importantes cadenas hoteleras españolas.

Argelia

En Argelia, el enfrentamiento entre el presidente, Abdelaziz Buteflika, y su primer ministro, Alí Benflis, cesado por el primero en mayo de 2003, han marcado el eje central de la vida política interna que se prepara para unas elecciones presidenciales en abril de 2004, en las que ambas personalidades desean presentarse como candidatos. Dicho enfrentamiento creciente ha podido detectarse incluso en las actitudes de unos y otros ante la crisis y posterior guerra de Irak: mientras el ministro de Asuntos Exteriores y miembro de la corriente del Frente de Liberación Nacional (FLN) disidente con Benflis, Abdelaziz Belkhadem, pedía el 20 de marzo la vuelta a la legalidad internacional y rechazaba al día siguiente la petición estadounidense de cerrar la embajada iraquí en Argel, el FLN, fiel al aún primer ministro Benflis emitía el comunicado más duro de toda la clase política argelina, calificando de “agresor” a EEUU y subrayando su apoyo “al pueblo iraquí”.

Las dificultades políticas internas, en las que el FLN de Benflis se alinea con los opositores a la política de privatizaciones auspiciada por Buteflika, fundamentalmente el veterano sindicato Unión General de Trabajadores Argelinos (UGTA), y llevada adelante por ministros como Hamid Temmar y Chakib Khelil —a quien Benflis frenara en el parlamento su proyecto de ley de hidrocarburos—, contrasta con un contexto económico general que, al menos en las macromagnitudes y en perspectiva, es óptimo: las reservas de divisas del país representan dos años de importaciones y la deuda externa, que en 1995 alcanzaba 30.000 millones de dólares, se situaba a fines de 2002 en los 22.000 millones esperándose entonces que a fines de 2003 hubiera bajado hasta los 20.000 millones.

Mientras, la perduración del terrorismo islamista —aunque con menos intensidad que antaño—, los efectos sociales pero también políticos del terrible terremoto de 21 de mayo (alrededor de 2.500 muertos), la laxitud oficial en la sanidad detectada en el verano con los brotes de peste bubónica en el Oranesado y la contaminación con vertidos industriales de algunas de las mejores playas, o el avance de las privatizaciones, en el frente interno, y la continuación de las negociaciones de adhesión con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Argelia firmado solemnemente en abril de 2002, en el frente exterior, han venido monopolizando los esfuerzos y la atención en el presente año. El enfrentamiento entre Buteflika y Benflis ha minado FLN, que hacía menos de un año parecía una opción de futuro.

El terrorismo ha mantenido su ofensiva en el país, con ataques más distanciados que antes tanto del Grupo Islámico Armado (GIA), dirigido a lo largo de 2003 por el Emir Rashid Abu Turab hasta su detención por las autoridades argelinas en Saula, en las proximidades de Argel, el 17 de noviembre, como del Grupo Salafista de Predicación y Combate (GSPC), de Hassan Hattab, aunque este último ha introducido un peligroso elemento en su activismo: la inclusión de objetivos extranjeros y la transnacionalización de su terrorismo. A esto último contribuyó el secuestro en febrero de una treintena larga de turistas occidentales en el sur de Argelia, en la zona escasamente controlada que limita con Níger y con Malí, por un grupo dirigido por Mokhtar Belmokhtar, un antiguo oficial desertor del ejército argelino que combatió en Afganistán. Bajo su mando habría un centenar largo de terroristas moviéndose con relativa facilidad en el triángulo formado por el sur profundo argelino, el este de Mauritania y el norte de Malí. En la reorganización de esta célula terrorista estaría también involucrado Abderrazak Lamari, el antiguo Emir del GSPC en la región. El secuestro el 5 de julio de tres agentes aduaneros en la región de Reggane, trasladados a territorio de Malí donde uno de ellos apareció muerto, confirmaba junto con la crisis de los rehenes citada esta tendencia. El mes de julio terminaba con los 15 turistas occidentales (10 alemanes, cuatro suizos y un holandés) aún en manos de sus captores —la otra mitad había sido liberada por tropas argelinas en la primavera— dirigiéndose hacia una aparentemente liberación pactada en Malí, que finalmente se produjo —la de 14 de ellos tras el fallecimiento de una turista alemana— el 18 de agosto en el norte del país saheliano. Según la cadena pública alemana ZDF se habrían desembolsado 4,6 millones de euros por rehén en una ardua negociación en la que habrían actuado como mediadores el antiguo jefe rebelde tuareg, Iyad Ag Ghali, y algunos círculos libios.

En cuanto al terrorismo tradicional, el año comenzaba con un luctuoso atentado del GSPC que asesinaba el 4 de enero en la región de Batna a 39 paracaidistas y provocaba heridas a cerca de 40: este ha sido el atentado más importante cometido contra el ejército desde que en abril de 2002 fueran asesinados 21 militares en otra emboscada en la región de Saida. El activismo islamista violento se acentuaba a comienzos del verano: entre el 13 y el 15 de junio, 17 terroristas del GSPC murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la provincia de Buir; el 15 de junio murieron dos personas en la región de Bumerdés y, ese mismo día, en la capital de la Cabilia, Tizi-Uzu, una bomba mataba a cuatro policías días después de que otros cuatro hubieran sido asesinados en Beni Duala, a 30 kilómetros de Tizi-Uzu. Incluso los 180 campos con 13.000 tiendas de campaña levantados por el ejército en las regiones afectadas por el terremoto de 21 de mayo para acoger a los 80.000 damnificados tenían que contar con protección policial y militar para evitar incursiones terroristas. Por otra parte, en junio, la confirmación del procesamiento en España, por parte del juez Ismael Moreno, del presunto tesorero de Al Qaeda en España, el argelino nacionalizado español Ahmed Brahim, detenido el 13 de abril de 2002 y relacionado con los autores de los atentados contra las embajadas de EEUU en Kenia y Tanzania en 1998, era un capítulo más del necesario trabajo internacional en la lucha contra un terrorismo internacionalizado. También en el frente hispano-argelino es destacable la detención el 6 de agosto en Lloret de Mar de Diauat Abdalhai, como presunto cómplice de otro ciudadano argelino detenido días antes por la policía alemana en Hamburgo, en una operación que desvelaba nuevos datos sobre la célula de Mohamed Atta y que parecía impedir también la comisión de atentados islamistas en la Costa del Sol. La excarcelación de los líderes del FIS, Abassi Madani y Alí Belhadj el 2 de julio, tras haber cumplido doce años de condena, ha permitido en cierta medida pasar la página del oscuro capítulo representado por el papel del FIS en la historia contemporánea de Argelia; en cualquier caso, el papel que puedan jugar ambas figuras constituye una cuestión abierta ya que, aunque tienen formalmente prohibido hacer proselitismo y ejercer cargos públicos, Madani ha intervenido en el verano en la cadena qatarí Al Jazira refiriéndose a la política interna de Argelia en el contexto de las elecciones presidenciales de abril de 2004.

En lo que a las relaciones con España respecta, 2003 ha venido siendo año de consolidación de los lazos reforzados en octubre de 2002 con la firma del tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. Argelia es en la actualidad el primer mercado para los españoles en el mundo árabe, y España el cuarto socio comercial de Argelia: los intercambios bilaterales pasaron de 1.600 a 2.600 millones de dólares entre 1999 y 2001. En 2003 los empresarios

españoles han contado con una renovada línea de crédito de 105 millones de dólares para invertir en Argelia y junto a la concentración tradicional en el sector energético hay otros emergentes que cada vez son más atractivos para los inversores españoles como el de infraestructuras o el bancario. En el ámbito de los hidrocarburos Cepsa consolida su apuesta argelina con el comienzo a principios de diciembre de 2002 de la producción del yacimiento de Urhud, su segundo campo en Argelia y del que espera obtener unos ingresos anuales de 330 millones de euros, además de incrementar su producción de crudo que ya explota en el vecino campo de Rhurde El Khruf, la intensificación de su despliegue en Argelia con sus avances en la puesta en marcha del proyecto Medgaz, un gasoducto directo entre Beni Saf (Argelia) y Almería atravesando 200 kilómetros del mar de Alborán, del que ya se ha realizado el estudio de gestión, el programa y el presupuesto, y con la realización de los análisis preliminares para desarrollar, a lo largo de 2003, la ingeniería y comenzar su construcción en la primavera de 2004 para culminarlo en 2006. Este balance positivo y esperanzador de cara al futuro inmediato fue puesto de manifiesto en la primer Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los presidentes Aznar y Buteflika, prevista por el tratado y celebrada en Argel en los días 26 y 27 de noviembre.

Marruecos y el Sáhara Occidental

La dinámica electoral, el fenómeno terrorista y la evolución de las relaciones con España constituyen los tres ejes sobre los que trataremos del Reino alauita.

Tras las elecciones legislativas de 27 de septiembre de 2002 Mohamed VI había nombrado como jefe de gobierno al tecnócrata Driss Jettu, hasta entonces ministro de Interior y hombre próximo a palacio, cogiendo por sorpresa a los partidos más votados en dichos comicios, que intentaban constituir una mayoría suficiente para gobernar. Los tratos que llevaba a cabo el partido Istiqlal para formar gobierno con los islamistas moderados del Partido de Justicia y Desarrollo (PJD), que había quedado tercero tras el recuento, y con los dos grandes partidos bereberistas —el Movimiento Popular y el Movimiento Nacional Popular— marginando así a los socialistas de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), parece que llevaron al monarca a aplicar las prerrogativas que el artículo 24 de la Constitución le asignan. Esta estrategia de freno suave a los avances islamistas se ha seguido manteniendo en 2003, en concreto en las elecciones municipales de junio, aunque en este año hay que añadir, lamentablemente, el protagonismo del terrorismo islamista.

Tras los cinco atentados suicidas de 16 de mayo en Casablanca, que provocaron 45 muertos, la mayoría de ellos marroquíes, el terrorismo islamista se ha convertido en Marruecos en un actor añadido tanto en su política interna como exterior. Ya desde principios de enero la Gendarmería Real había neutralizado parte de un grupo islamista dispuesto a utilizar las armas en Meknes, y en febrero se había detenido durante unas horas al predicador Hasan Kettani, hasta el otoño de 2001 responsable de la mezquita La Meca de Salé, junto a Rabat, y que en octubre de ese año encabezó la lista de 16 ulemas firmantes de una fatwa que prohibía la participación de Marruecos en la guerra internacional contra el terrorismo. Por otro lado, en el curso de las investigaciones por los atentados contra la Casa de España, el Hotel Safir, el Consulado de Bélgica, la Alianza Judía y el Cementerio Judío de Casablanca, el 28 de mayo se anunciaba la muerte —“por causas naturales”— del emir que, según la confesión de los detenidos, los coordinó: Abdalhak Mul Sebbat. Casi al mismo tiempo, el Parlamento marroquí aprobaba una dura y consensuada ley antiterrorista.

En días y semanas posteriores las detenciones se multiplicaban tanto en Marruecos como en países europeos como España, hasta alcanzar a mediados de agosto los 634 detenidos. El 3 de junio era detenido en Tánger Robert Richard Antoine-Pierre, ciudadano francés convertido al Islam en Turquía, conocido como Abu Abderrahmán, y considerado uno de los emires de la red marroquí Salafia Yihadia (Guerra Santa Auténtica): él ería el primer implicado no marroquí en los atentados. Días después, el 14 de junio, el Cuerpo Nacional de Policía detenía en Algeciras a Abdelaziz Benyaich, ciudadano francés de origen marroquí, en aplicación de una orden internacional de captura emitida por Marruecos, y desde mediados de julio la fiscalía de la Audiencia Nacional se mostraba favorable a la extradición a Marruecos tanto de Benyaich como de Hicham Tamsamani Jad, imám de una mezquita de Toledo y también sospechoso de estar involucrado en los atentados, siempre y cuando no se pidiera para ninguno de ellos la pena de muerte. Desde Ceuta, el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Luis Vicente Moro, proponía que los ciudadanos con doble nacionalidad involucrados en actividades ligadas al narcotráfico, al radicalismo islámico o activos en favor de Marruecos puedan perder su nacionalidad española. Volviendo a los atentados de Casablanca, la autoría local atribuida a Assirat al-Mustaqim (La Recta Vía) permite entrever también, como ocurre en el caso del terrorismo argelino, tupidas redes internacionales. El 19 de agosto se dictaban las primeras sentencias: cuatro condenas a muerte, que podrían ejecutarse en aplicación de la nueva ley antiterrorista vigente desde junio; 39 a cadena perpetua; 15 a penas de 30 años; y, para los 15

acusados restantes, condenas que van desde los ocho meses a los ocho años. Por otro lado, el 25 de agosto comenzaba en Rabat el proceso contra los presuntos implicados del grupo del converso Pierre Robert, entre los que se encuentra el ciudadano ceutí Abdelaziz Hichu. El 22 de noviembre, el Tribunal de Apelación de Rabat emitía duras sentencias en el marco de un macrojuicio contra 63 islamistas radicales de la Salafiya Yihadia detenidos en Agadir: 58 de ellos recibieron condenas, 16 de ellos a 20 años y el resto a penas de entre 2 y 15 años de prisión. El 21 de noviembre habían sido condenados, también en Rabat, a penas de entre 2 y 20 años cinco islamistas marroquíes acusados de asesinar al ciudadano judío marroquí Albert Rebibo el pasado 11 de septiembre en Casablanca.

Junto al activismo propiamente terrorista es importante destacar el ascenso del islamismo político legal, el del PJD, y también del tolerado de Justicia y Caridad (Al Adl wal Ihsane), aproximación que nos servirá de entrada en la vida política del Reino a lo largo de 2003. El islamismo se había dejado ver desde principios de año en las calles antes de hacerlo en las urnas: el 23 de febrero, en Casablanca, 30.000 de los 100.000 manifestantes convocados a favor de Irak por el Comité contra la guerra eran islamistas convocados por Justicia y Caridad del jeque Abdesalam Yassine, y el 2 de marzo eran, de nuevo en Casablanca, más de 150.000 los manifestantes, la mayoría islamistas convocados por el PJD. Este partido había triplicado sus escaños en el Parlamento en las legislativas de septiembre de 2002, convirtiéndose en el partido más votado del país y ya en marzo se preveía —como así ha sido después— que con la reforma entonces introducida de considerar la mayoría de edad electoral a los 18 años los islamistas podrían avanzar más aún en las elecciones municipales de junio.

Este islamismo ascendente llevó al Rey Mohamed VI —que se veía en aquellas fechas obligado a aplazar la segunda ronda de negociaciones con EEUU para la firma de un acuerdo bilateral de libre cambio— a llamar a la ciudadanía, con motivo del comienzo de la guerra en Irak el 20 de marzo, a “no dejarse instrumentalizar para sembrar cizaña y resquebrajar la estabilidad”. Aunque se prohibieron las manifestaciones, a la autorizada el 30 de marzo en Rabat (30.000 participantes según el ministerio de Interior y 300.000 según el convocante Comité Nacional de Apoyo a Irak) asistieron personas disfrazadas de suicidas palestinos que portaban sus fotos, escena nunca vista en las calles marroquíes. Pero la dimensión violenta que tuvo su primera manifestación ya en agosto de 1994, con el asesinato de dos turistas españoles en el Hotel “Atlas Asni” de Marrakech, y ahora en Casablanca, podría haber estado gestándose desde hace una larga década. El grupo Assirat al Mustaqiam, rigorista y violento y considerado por los

servicios de seguridad como autor directo de los atentados suicidas, se dió a conocer en Sidi Mumin, un barrio miserable de Casablanca donde se hacían 20.000 personas y del que procedían 8 de los 14 suicidas. El Emir de Assirat al Mustaqim es Zakaria Miludi, quien junto a Omar Haduchi en Tetuán y Mohamed Fezzazi en Tánger es uno de los principales emires cuasi-independientes de la red Salafia Yihadia, nacida a principios de los años noventa y alimentada por varias decenas de “afganos” marroquíes que regresaron enardecidos por su victoria sobre los soviéticos. Perseguida con ahinco por las autoridades marroquíes, su desestructuración ha permitido perpetuar su activismo. Las acciones de Miludi, centrado en Sidi Mumin, se producían normalmente tras la oración del atardecer y se dirigían contra traficantes de droga, policías o consumidores de alcohol; uno de estos últimos fue lapidado el 23 de febrero de 2002, en aplicación de una fatwa que el propio Miludi había dictado y por la que fue detenido.

En los meses posteriores a los atentados el pulso entre los islamistas, por un lado, y el poder y los círculos anti-islamistas por otro se ha venido agudizando. La exigencia del entonces número dos de la USFP, Mohamed El Yazhri —elegido secretario general del partido en noviembre de 2003—, a lo moderados del PJD de que pidieran perdón a los marroquíes por los atentados es un ejemplo elocuente.

En lo económico, en mayo el incremento del turismo y las abundantes lluvias producidas desde finales de 2002 presentaban datos muy favorables para la evolución económica del país y la cifra de 302.000 turistas contabilizados en febrero era vista con optimismo por el ministerio de Finanzas hasta que se produjeron los atentados de Casablanca. En el terreno de las inversiones extranjeras el compromiso francés con el país se mantiene y se refuerza tal y como lo ilustran algunos ejemplos: el grupo Bouygues construye el proyecto portuario Tánger-Mediterráneo, Vivendi ha ampliado su capital en Maroc Télécom hasta el 51% en el marco de las privatizaciones, Renault va a adquirir el 38% del capital de la marroquí Somaca y, en el sector bancario, el Banco Marroquí de Comercio Exterior (BMCE) anunció el 1 de octubre la próxima cesión del 20% de su capital a Caisse d'Épargne.

En el horizonte de la reunión de alto nivel (RAN) hispano-marroquí, prevista para el 8 y 9 de diciembre en Rabat, la agenda en materia de cooperación que aporta España incluye ayudas por valor de 350 millones de euros y un programa de canje de deuda por inversiones de 40 millones de euros. La mejoría en las relaciones bilaterales desde diciembre de 2002 ha permitido en este año impulsar proyectos comunes como es la construcción de una central térmica cerca de

Tánger, en la que participará Endesa junto a la marroquí ONA y a la alemana Siemens. Desde fechas previas a dicha reunión los intentos españoles por superar, en coordinación con las autoridades marroquíes, todo posible desencuentro han sido importantes, y se han centrado en tres cuestiones: el desbloqueo de la cooperación en materia de control de la inmigración irregular; la moderación del debate en materia agrícola; y, finalmente, la cautela ante la evolución del tratamiento de la cuestión del Sáhara Occidental en la ONU. Es preciso también destacar que la cooperación hispano-marroquí en el ámbito de la defensa pasa por uno de sus mejores momentos tal y como se puso de manifiesto durante la visita de una delegación de alto nivel del Ministerio de Defensa español a Rabat en los días 14 y 15 de octubre, tan sólo tres días después de la visita de Estado del presidente Jacques Chirac en la que el capítulo defensa fue particularmente importante.

El aumento de la inmigración irregular en los últimos meses ha supuesto, una vez retomados con fluidez los contactos diplomáticos a partir de la reunión de desbloqueo protagonizada por los ministros de Asuntos Exteriores, Ana Palacio y Mohamed Benaissa, de 11 de diciembre de 2002, y la creación de cinco grupos de trabajo permanentes —uno de ellos sobre migraciones que se puso en marcha el 16 de enero en Rabat, en el marco de la reunión del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ramón Gil Casares, con su homólogo marroquí, Taieb Fassi Fihri— el principal escollo en la relación bilateral. En perspectiva, entre 1999 y agosto de 2003 se cifran en más de 60.000 los inmigrantes irregulares interceptados en el Estrecho y Canarias. En julio y agosto de 2003 la ola de calor ha permitido llevar a cabo derivas más largas y superar los resultados del año pasado, aunque sin alcanzar el récord de 2001. Hasta el 3 de septiembre el número de detenidos en Andalucía y Canarias alcanzaba los 11.101 irregulares, el 33% de ellos sólo en agosto. El Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), puesto en marcha en 2002, permite la detección avanzada y facilita las detenciones, pero ha llevado a las mafias que trafican con los emigrantes irregulares a desplazarlos por Marruecos para dirigir las pateras, en rutas más largas, hacia Granada, Almería e, incluso, desde este año, a Murcia. En cuanto a los naufragios, el ejemplo más dramático fue el producido el 25 de octubre frente a Rota, en el que al menos 36 personas perdieron la vida, y que supone el mayor desastre producido en la costa meridional española. La inmigración irregular se agrava además con la creciente llegada de menores, cuya repatriación en aplicación del acuerdo de readmisión hispano-marroquí de 1992 es especialmente difícil si no son reclamados por sus familias. En palabras del presidente de la Asociación Marroquí de Amigos y Familiares de Víctimas de la

Inmigración Clandestina, Jalil Jemaa, esta realidad complicará mucho el problema en el futuro inmediato.

España ha seguido tomando medidas para tratar de frenar dicha presión migratoria irregular y recuerda a Marruecos los compromisos adquiridos ante Bruselas por el ministro Benaissa el 14 de noviembre de 2002: la voluntad de negociar un acuerdo de readmisión de irregulares con la UE fue hecha pública en el contexto del anuncio por parte de la Comisión Europea, en un informe de 3 de diciembre, de 120 millones de euros destinados a apoyar a Marruecos en el período 2002-2004 (70 millones destinados al desarrollo del norte del país, 40 a la lucha contra la inmigración irregular y el resto a formación, material y a la creación de un gran centro de canalización y organización de los flujos migratorios que atraviesan el país). El 22 de octubre José María Aznar anunció la asignación de 2,3 millones de euros para la creación de un SIVE en Fuerteventura como el ya operativo en el Estrecho. En Marruecos, del 23 al 27 de febrero la Gendarmería Real detenía en varias operaciones coordinadas a 222 personas que intentaban entrar clandestinamente en Europa y estas operaciones servían de telón de fondo a la discusión parlamentaria de un proyecto de ley sobre emigración e inmigración que introducía medidas muy restrictivas así como otras de cooperación en actividades de control de irregulares tanto con España como con la UE. Meses después, el 19 de octubre, una operación de la Gendarmería Real en Tánger permitió detener a 109 personas que se disponían a atravesar el Estrecho y el 18 de noviembre, en la misma ciudad y en el contexto de la visita a España del ministro de Interior marroquí, Mustafá Sahel, los detenidos en diversas operaciones sincronizadas ascendían a 142. Dicha visita servía tanto para crear una comisión bilateral que se reunirá mensualmente a partir del 3 de diciembre, como para que Marruecos explicara el alcance de los dos órganos creados recientemente en su ministerio de Interior con competencias en la materia: la Dirección de Migración y Fronteras y el Observatorio de la Migración.

En materia agrícola, a finales de octubre y tras largas y arduas negociaciones, la UE y Marruecos alcanzaban un acuerdo inmediatamente contestado por las organizaciones agrarias españolas: éstas piensan que se sacrifica, entre otros, el sector tomatero español y se privilegia el sector cerealero francés, que podrá exportar en campañas normales parte de sus excedentes. Los agricultores ya han comenzado en noviembre sus movilizaciones.

En cuanto al Sáhara Occidental, 2003 ha sido un año especialmente dinámico en este aspecto. El anuncio el 10 de julio en Nueva York por el Frente Polisario de su compromiso de

estudiar la versión revisada del Plan Baker —que el embajador de Marruecos ante la ONU se apresuró a calificar de “contraproducente”— ha dinamizado el debate sobre el Sáhara Occidental en un Consejo de Seguridad presidido por España hasta el 31 de julio, fecha límite para decidir los siguientes pasos. En la nueva propuesta impulsada por EEUU en el Consejo de Seguridad, la población del territorio sería responsable del gobierno local, la economía, la seguridad interior, la aplicación de la ley, el bienestar social, la cultura, la educación y el comercio bajo la supervisión de una “Autoridad del Sáhara Occidental”, una asamblea local elegida en los 12 primeros meses de aplicación del plan. Las atribuciones de soberanía (relaciones exteriores y defensa) quedarían en manos de la potencia administradora, Marruecos, y la ONU tendría la competencia de organizar “en exclusiva” un referéndum de autodeterminación para fijar el estatuto definitivo del territorio en un mínimo de cuatro años y en un máximo de cinco después de la entrada en vigor del plan.

Este papel exclusivo de la ONU, unido a la generosa autonomía, despertaba recelos en Rabat no sólo por la posibilidad de que el censo de votantes que se pueda utilizar —en principio el establecido por la ONU el 30 de diciembre de 1999— no fuera en ese momento acorde con los intereses marroquíes, sino porque después de tantos años de bloqueo preocupa la sola idea de que se celebre finalmente el referéndum. De cara al futuro, Marruecos, que sigue contando con el apoyo diplomático de Francia en el Consejo de Seguridad, como se puso de manifiesto en la reunión de expertos del 16 de julio y en la visita de Estado del presidente Chirac a Marruecos del 9 al 11 de octubre, debe valorar la posición de España y Argelia, los dos países que, según el Polisario, han hecho posible su decisión, y también la de EEUU. España, en su comprometida presencia en el Consejo durante el año y medio restante, insiste en su invitación a las partes para que negocien, sin considerar el plan Baker revisado como inamovible, aunque sí como un potencial avance hacia la solución final por lo que tiene de revolucionario. Tras la aprobación el 31 de julio de la última versión del Plan Baker, por unanimidad de un Consejo de Seguridad presidido por España, el embajador de EEUU ante la ONU, John Negroponte, ha seguido trabajando sobre el texto, pero el 31 de octubre sólo ha sido posible renovar el mandato de la MINURSO hasta el 31 de enero de 2004 ya que, por el momento, Marruecos no ha variado su posición de rechazo a dicho plan. En este período es de destacar la liberación de prisioneros marroquíes por parte del Frente Polisario en dos fases, ambas a petición del presidente Aznar: una primera el 11 de febrero, en la que fue liberado un centenar de presos, y una segunda anunciada el 14 de agosto y producida el 1 de septiembre, con la entrega al Comité Internacional

de la Cruz Roja de 243 prisioneros que fueron repatriados desde Tinduf hasta la base marroquí de Inezgan, en Agadir.

Argelia, por su parte, preveía entrar con toda probabilidad en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente tras el entonces reciente acuerdo entre los ministros argelino y libio de Asuntos Africanos, solicitado a Argel por EEUU para evitar que una Libia aún sometida a sanciones de la ONU —suspendidas desde 1999 pero que no se levantaron definitivamente hasta semanas después— concurriera en septiembre como candidato por rotación. Marruecos debe tener también en cuenta que el impulso de EEUU a esta iniciativa debía entenderse en el marco de su ofensiva africana y hacia el Magreb, región donde Washington busca el refuerzo de sus vínculos con Argel sin sacrificar los que mantiene con Rabat. El 28 de octubre el Consejo de Seguridad decidía prorrogar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) hasta el 31 de enero de 2004. La tranquilidad para España es sólo relativa, pues aplaza el tratamiento de la cuestión a principios de año, y se hará en un contexto marcado por la presencia de Argelia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, estatuto que compartirá con España durante el año 2004. El duro comunicado del ministerio marroquí de Asuntos Exteriores, de 22 de octubre, y el rechazo al último informe del secretario general de la ONU, Kofi Anan, ante el Consejo de Seguridad sitúa a Marruecos en una posición de obstrucción férrea a la aplicación de un Plan Baker modificado que, por otro lado, España trató de moderar en algunos de los términos que más podían molestar a Rabat.

Mauritania

El intento de golpe de Estado contra el presidente Maauya Sid'Ahmed Uld Taya, producido el 8 de junio, ponía una vez más de manifiesto las debilidades del país más vulnerable del Magreb —2,5 millones de habitantes para más de un millón de kilómetros cuadrados de extensión—, aunque no por ello menos importante desde una perspectiva geoestratégica y más aún para España: vecino del archipiélago canario, rico en recursos pesqueros y, en perspectiva, también en recursos energéticos, y ligado tradicionalmente a cualquier escenario de solución futura al conflicto del Sáhara Occidental. La intentona produjo 28 muertos —23 militares, 15 de ellos rebeldes y 8 leales al gobierno, incluyéndose entre estos últimos al jefe de Estado Mayor del Ejército, Mohamed Lemine Uld Ndiayan, y 5 civiles—, fue liderada por elementos baasistas pro-iraquíes presentes en el ejército, contrarios a lo que consideran una política extremadamente

prooccidental y proisraelí del régimen de Uld Taya, que mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde 1995. El cabecilla, muerto en los combates que duraron todo el día 8 y parte del día 9, fue identificado como el coronel Salah Uld Hnana, un jefe influido por el baasismo y que por ello había sido expulsado del ejército en 2002. Las corrientes tanto baasistas como islamistas radicales han tenido y tienen sus adeptos en Mauritania y han sido reprimidas e incluso disueltas, especialmente en los últimos ocho años: el 3 de junio, 32 islamistas eran detenidos acusados de amenazar la seguridad nacional en una campaña iniciada tras los atentados suicidas de Casablanca de 16 de mayo; y en el mismo mes de mayo 9 militantes baasistas mauritanos eran condenados a tres meses de cárcel por “reconstitución de organización disuelta”. El 7 de noviembre el presidente Uld Taya ha renovado su mandato —como ya hiciera en convocatorias anteriores en 1992 y 1997— en unas elecciones duramente criticadas por la oposición.

Este país se dibuja progresivamente como un atractivo destino para los inversores pues, aparte de su boyante sector pesquero que ya motivó la firma de un acuerdo en dicho ámbito con la UE, se estima que producirá su primer barril de crudo a más tardar en el tercer trimestre de 2005, y sus reservas probadas alcanzan ya los 100 millones para cada uno de los dos principales campos “off shore” —Chinguetti y Banda, operados, respectivamente, por la australiana Woodside y por la británica Dana—. En agosto se han realizado prospecciones adicionales para completar la evaluación de rentabilidad.

Las relaciones con España han sido especialmente dinámicas a lo largo de 2003, destacándose tanto la visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, a Nuakchott el 14 de junio como la visita de Estado del presidente Uld Taya a España, del 30 de junio al 2 de julio, que supuso la puesta de largo de unas relaciones que vienen de antiguo y que tienen como principales hitos un acuerdo bilateral en el ámbito de la seguridad, firmado en febrero de 1989, y una intensa actividad de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) que tiene en Mauritania a su tercer receptor de fondos de cooperación tras Marruecos y la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

LAS RESPUESTAS MULTILATERALES A LOS DESAFÍOS PROCEDENTES DEL SUR DEL MEDITERRÁNEO

La concertación de los países de la región mediterránea, tanto en el eje norte-sur como en el sur-sur y en el norte-norte ha seguido avanzando a lo largo de 2003.

El año comenzaba con aproximaciones de diverso tipo obedeciendo a desafíos tanto internos como internacionales. Así, en el marco de la XXII cumbre Franco-Africana, reunida en París del 19 al 21 de febrero, los presidentes de Argelia, Abdelaziz Buteflika, y de Mauritania, Maauya Uld Sid'Ahmed Taya, junto con el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el primer ministro de Túnez, Mohamed Gannuchi, adoptaron una posición común en contra del recurso a la guerra contra Irak.

Tras la celebración en Creta, el 26 y 27 de mayo, de la reunión intermedia de ministros de Asuntos Exteriores del Proceso de Barcelona —con la presencia, además de los veintisiete socios, de los diez ministros de los países candidatos a la adhesión en 2004— éste ha demostrado su operatividad, a pesar de la postguerra iraquí y de los vaivenes en Oriente Próximo. La coincidencia en este foro, por primera vez en casi tres años, de los ministros de Asuntos Exteriores de Israel, Silvan Shalom, y de Siria, Faruk Al Shara, es indicativo de las posibilidades de avance. En Creta se examinó la aplicación del plan de acción aprobado en la cumbre ministerial de Valencia de 22 y 23 de abril de 2002 y de los progresos en el horizonte de la próxima reunión conocida en el argot del Proceso como Barcelona VI (Nápoles, 3-4 de diciembre de 2003). El encuentro de Creta se celebró a los pocos días de la III Conferencia de Ministros de Energía (Atenas, 20-21 mayo), en la que se fijaron las prioridades a cumplir antes de 2006, que priman la interconexión con las regiones vecinas. Al margen de la reunión, los ministros de Energía de Argelia, Marruecos y Túnez firmaron una declaración de intenciones sobre la integración de sus mercados de electricidad a escala magrebí, y su posterior conexión con el mercado interior eléctrico de la UE. Los ministros de Energía de la ANP e Israel decidieron crear un grupo de trabajo técnico con la Comisión Europea y abierto a otros países mediterráneos para la identificación y promoción de proyectos de interconexión energética de interés común. En el plan de trabajo previo a la ministerial de diciembre los mayores esfuerzos han venido estando dirigidos a culminar las negociaciones del acuerdo de asociación bilateral con Siria —el único país que queda por firmar— y a poner en práctica los compromisos adquiridos en el plan de acción aprobados en la reunión ministerial anterior (Barcelona V), celebrada en Valencia en abril de 2002. El comisario de Relaciones Exteriores, Chris Patten, visitó Siria el 15 y 16 de septiembre para reunirse con el presidente Bashar el Assad, con el veterano ministro de Asuntos Exteriores, Faruk Al Shara, con el recién nombrado primer

ministro, Naji Al Otri, y con círculos empresariales que son los más interesados en el país en reforzar vínculos con Bruselas.

En el terreno económico-comercial destacan tanto la reunión de altos funcionarios responsables de Comercio, el 5 de junio, como la conferencia convocada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) sobre el desarrollo del sector privado, con especial atención al Magreb, ambas celebradas en Bruselas. En julio se inaugura en El Cairo una oficina regional de la Facilidad Financiera para Inversiones y Partenariado Euromediterráneo (FEMIP), otro de los compromisos adquiridos en Valencia y creada en el mismo año 2002 en el marco del BEI para reforzar la cooperación regional. La FEMIP permitía el 10 de septiembre canalizar el primer préstamo concedido por el BEI al sector privado sirio —40 millones de euros— y ha estado presente en la agenda de los múltiples encuentros que en estos últimos meses ha mantenido la Unión con sus socios mediterráneos, entre otros los siguientes: el Diálogo Económico UE-Túnez (Bruselas, 9 de julio); el IV Consejo de Asociación UE-Túnez (Bruselas, 30 de septiembre); el Diálogo Económico UE-Marruecos (Bruselas, 2 de octubre); etc. El Proceso de Barcelona actúa indudablemente como estimulador para otras iniciativas tanto de ayuda como de inversión en los países mediterráneos no comunitarios: así, la Sociedad Financiera Internacional (SFI) lidera un programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de Argelia, Egipto y Marruecos iniciado en septiembre de 2002 y tutelado por el Banco Mundial, y al que, en 2003, ha pedido a España que se incorpore.

En el ámbito social, cultural y humano, en junio se puso en marcha el Plan Regional Mediterráneo sobre Cooperación en Materias de Interior y Justicia; a fines de 2003 empezarán a verse los primeros resultados del esquema de cooperación interuniversitario Tempus, ampliado en Valencia a la región mediterránea; y en Creta los ministros consensuaron los objetivos, las actividades y el establecimiento futuro de la Fundación para el Diálogo de las Culturas y las Civilizaciones acordado también en el plan de acción aprobado en la reunión ministerial de Valencia. En la reunión de 25 de septiembre del Comité Euromediterráneo para el Proceso de Barcelona, celebrada en Bruselas, se siguió avanzando en la elaboración de las estructuras de dicha Fundación.

Es importante destacar que semanas antes de la reunión de Creta, en concreto el 17 de abril y en Atenas, la Unión Europea había ofrecido expresamente a sus socios mediterráneos — además de a la Federación Rusa, a Ucrania, a Bielorrusia y a Moldavia, reuniendo así a todos los

países que compartirán frontera con la UE tras la ampliación de 2004— un compromiso de cooperación más estrecha así como amplios beneficios económicos para la próxima década en el marco de un nuevo Espacio Europeo de vecindad.

En otros ámbitos, tanto de carácter subregional como sectorial, 2003 ha sido prolífico en encuentros tendentes a profundizar el diálogo y la cooperación.

Destacable es el relanzamiento del Grupo 5+5, que desde su tercera reunión ministerial celebrada en Lisboa en los días 25 y 26 de enero de 2001, tras una década inactivo, ha visto cómo en 2003 ha celebrado dos reuniones —en Saint-Maxime en abril y en el Castillo de Esclimont, cerca de París, en octubre— a la espera de la celebración de su cumbre de jefes de Estado y de gobierno, en los días 5 y 6 de diciembre de 2003 en Túnez, que será la primera al haberse cancelado la celebración de la prevista en enero de 1992 también en Túnez.

El lanzamiento de la llamada Operación Ulises, inaugurada en Algeciras por el Ministro de Interior Angel Acebes el 28 de enero y que se extendió en su primera fase hasta el 8 de febrero, pretendía realizar un ensayo de control multinacional de la inmigración irregular y en ella participaron los cinco miembros de la UE con mayor número de inmigrantes irregulares de origen africano: España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. En este programa piloto cada país participante puso un buque con el objetivo de realizar controles en el Mediterráneo Occidental, entre Algeciras y Sicilia. En la segunda fase, celebrada en abril, se hizo lo propio en aguas atlánticas en torno a Canarias y se intentó superar los fallos de descoordinación y de incompatibilidad de medios detectados en la primera fase. Ambas fases de la Operación Ulises han pretendido ser el embrión de lo que algún día podrá ser una misión típica de una policía europea de fronteras, y está prevista la incorporación de Grecia, y con ella del Mediterráneo Oriental, a esta experiencia multilateral en la cuenca. La Operación Ulises constituye uno de los 15 proyectos piloto puestos en marcha por la UE para frenar la inmigración irregular.

Por otro lado, la reunión informal de ministros de Interior de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, celebrada en la localidad francesa de La Baule del 18 al 20 de octubre y que era continuación de otra similar celebrada en Jerez de la Frontera en mayo, permitía reforzar lazos entre los grandes de la Unión Europea en la lucha contra los nuevos riesgos, así como diseñar aproximaciones a sus socios magrebíes en el marco de la creación de una “zona euromediterránea de seguridad”. En La Baule, el asunto central del grupo fue la necesidad de

coordinar la lucha contra la inmigración irregular, y el encuentro coincidió en el tiempo con la tragedia producida en el canal de Sicilia, donde entre 50 y 60 somalíes murieron entre el 18 y el 19 de octubre intentando llegar a Italia. En junio y julio más de 150 personas habían perecido en esas aguas en varios naufragios y el ministro de Interior italiano, Giuseppe Pisanu, solicitó la atención de sus homólogos —y no solo de los reunidos en La Baule— sobre el problema.

Este empeño de involucrar a la Unión, objetivo prioritario del ministro Acebes, fue apoyado también por su colega francés Nicolas Sarkozy y se logró finalmente un compromiso de este grupo de ministros de negociar en común —aunque bajo la dirección de un solo país— los acuerdos bilaterales de readmisión de irregulares con los países de origen y tránsito. Sarkozy suscribió asimismo la propuesta de Acebes de que la UE asuma el coste de cada país en la lucha contra la inmigración irregular, ya que los países que son frontera exterior de la UE —España e Italia con papeles centrales en este caso— no pueden asumir solos el gasto.

En materia de lucha antiterrorista, es importante señalar que la reunión de ministros de Interior de Jerez de la Frontera anteriormente indicada se produjo en las fechas en las que Casablanca era objetivo del terrorismo suicida atrayendo la atención de estos, pero también hay otras dimensiones de reflexión y de trabajo que es preciso destacar. Así, la gira magrebí del presidente de Paquistán, Pervez Musharraf, quien recorriera entre el 14 y el 19 de julio Túnez, Argelia y Marruecos, le permitió reforzar la cooperación política y judicial con tres países especialmente interesados en controlar las actividades de “afganos” de su nacionalidad ocultos en Pakistán. Idéntico interés por los tres países manifestaba el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, en su gira magrebí de 2 y 3 de diciembre, en la que mostraba el interés de EEUU por aprender de la experiencia de Argelia, Marruecos y Túnez en la lucha contra sutiles formas de terrorismo transnacionalizado.

CONCLUSIONES

La continuidad en los trabajos del Proceso de Barcelona —tanto en grupos sectoriales como en las dos reuniones de ministros de Asuntos Exteriores, en Creta en mayo y en Nápoles en diciembre— y los esfuerzos tendentes a poner en marcha los compromisos y calendarios de la Hoja de Ruta han centrado el interés por el Mediterráneo en 2003 desde una perspectiva diplomática multilateral. El contexto internacional no ha sido favorable, máxime teniendo en

cuenta la crisis de Irak, con el comienzo de las grandes operaciones militares el 20 de marzo y su terminación a principios de abril para dar paso a una compleja postguerra, y con el creciente y extremadamente letal activismo terrorista en escenarios tradicionales como Argelia, Israel y los territorios palestinos o en otros más novedosos como Casablanca o Estambul.

En lo que a España respecta, nuestro país consolida en 2003 sus relaciones con los socios mediterráneos desarrollando los tratados bilaterales de cooperación con los países del Magreb central —con Marruecos (1991), con Túnez (1995), y con Argelia (2002)— a través de la celebración de las tres Reuniones de Alto Nivel anuales previstas (con Túnez en enero y con Argelia y con Marruecos en diciembre) y reforzando sus vínculos tanto con Mauritania (visita de Estado del presidente Uld Taya a España en julio) como con Libia (visita del presidente Aznar a Libia en octubre); es preciso destacar que España exportó en 2002 más a los cinco países del Magreb (por valor de 3.103 millones de euros) que a Iberoamérica (3.097 millones de euros), y ello a pesar de la enorme diferencia en PIB de ambas subregiones y a pesar también de la crisis bilateral con Marruecos. Más allá del Magreb, donde podemos decir que la política exterior española es ya plenamente global frente a la nefasta práctica de equilibrios de antaño, España ha reforzado este año sus relaciones y su presencia en socios tradicionales como Egipto, Jordania o Turquía y ha abierto, con la visita de los Reyes a Siria en noviembre, un nuevo ámbito que proyección que puede serle útil de cara a su deseo permanente de coadyuvar al arreglo de los conflictos que perduran en la zona.

En el contexto multilateral y junto al central Proceso de Barcelona, España consolida su papel en la región a través de marcos como el Foro Mediterráneo —un verdadero lobby dentro del Proceso de Barcelona por los once Estados que en él participan—, el Grupo 5+5, revitalizado en 2001 tras una larga década de hibernación y que en 2003 se ha esforzado en preparar su cumbre de diciembre, o los más recientemente creados grupos de cinco países especialmente dispuestos a cooperar entre sí en materia de Interior: el grupo de ministros de Interior de España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido) que en enero y abril desarrollaron un proyecto piloto de control de fronteras exteriores en aguas mediterráneas y atlánticas próximas a Canarias, respectivamente, y al que próximamente se unirá Grecia), y el grupo informal de ministros de Interior de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido reunidos en dos ocasiones durante 2003, en Jerez de la Frontera primero y en La Baule después. Los dos G-5 están demostrando con su trabajo su eficacia para dinamizar marcos bilaterales ya existentes y poner en marcha —o profundizar como es el caso de la Conferencia de Ministros de Interior del Mediterráneo

Occidental— otros de carácter multilateral. En el ámbito multilateral sur-sur es deseable que el dinamismo del Grupo 5+5 pueda ayudar a estimular a la Unión del Magreb Árabe (UMA), organización subregional calificada de necesaria por sus vecinos septentrionales y que no acaba de cristalizar como iniciativa operativa; sí son destacables ejes bilaterales magrebíes que se activan como el libio-tunecino ya visto anteriormente, el marroquí-tunecino en el seno del Grupo de Agadir, que quiere construir una zona de libre comercio entre ambos junto con Egipto y Jordania, o el argelino-tunecino que aumenta los intercambios comerciales y de población incluido el sector turístico (Túnez, que en 2002 recibió 720.000 turistas argelinos, tuvo 420.000 visitantes de dicho origen en enero de 2003, y espera que la cifra supere los 800.000 cuando termine el año).